Las crisis económicas argentinas y los ajustes sin reformas

Dr. Carlos Francisco Echezarreta

Asesor de CAIAMA

a característica de la evolución de nuestras recurrentes crisis es que ya no se puede precisar si se trata de episodios diferentes entre sí, o de erupciones emergentes en cada circunstancia, pero que obedecen a una naturaleza común que las interrelaciona y las transforma en un solo, extenso y continuado fenómeno, como una especie de trastorno permanente que nos obliga a convivir con tensiones sociales, caídas de la actividad y deterioro del empleo.

En cualquiera de los casos es notable la fuerte resistencia social que se genera frente a los ajustes fiscales y del gasto público que se imponen en cada jurisdicción.

La población percibe que hay ajustes; pero al mismo tiempo advierte que no hay reformas suficientes desde el sector público que remuevan las causas y eviten las recidivas.

Hay un doble juego de medidas: ayudas de los estados y de los organismos internacionales; y ajustes en el gasto público. Hay un doble juego de medidas: ayudas de los estados y de los organismos internacionales; y ajustes en el gasto público para dar lugar a la cancelación de las deudas soberanas. Fondos para superar el momento y exigencias para que esos apoyos sean reintegrados. Salvataje para los responsables políticos y esfuerzos para la población que los votó.

Pero ese escenario tiene un límite para su concreción. Se trata de la aceptación final pacifica de las sociedades afectadas, que por ahora se están

rebelando de manera generalizada con distintas formas de rechazo.

En nuestro país las protestas, muchas veces violentas y trágicas, se expresan con tomas de tierras y viviendas, cortes de rutas y calles, reclamando al Estado (nacional o local) que provea más asistencia con fondos públicos. Pero aquí no se trata de "indignados" que se resisten a un ajuste, sino de excluidos de larga data.

Hay, como se puede ver, rebeliones sociales en países de diferentes culturas, religiones y con regimenes de gobierno muy distintos y con diferentes grados de expresión.

Como los efectos se ponen de manifiesto en el área del empleo, las medidas de ajustes se orientan y enfocan, de modo principal (y a veces excluyente), al campo laboral y previsional.

Cada sociedad no puede considerarse inocente en tanto cuente con la posibilidad de elegir a sus gobernantes.

Sin embargo, el enfoque del problema desde el exclusivo aspecto laboral para sostener el empleo y la seguridad social ha demostrado ser insuficiente. Es uno de los sistemas a revisar; pero dentro de un conjunto de instituciones políticas y jurídicas que deben reacomodarse en forma coordinada.

La situación social deriva de la capacidad económica. Ésta, a su vez, resulta de la eficacia política, cuya suerte depende del recurrente y periódico voto (o aceptación) de los afectados por la insatisfacción social.

El empleo decente, como ha dado en llamarse (sostén de la paz social), depende de empresas sustentables.

Estas requieren de un estado de derecho y de una economía de mercado que atraiga las inversiones genuinas. El sistema económico está así estrechamente ligado al sistema social y al político (aunque los tres planos no se superponen en forma total).

No hay otra alternativa: La política de cada país condiciona su macroeconomía, y ambos escenarios determinan las características sociales y sus posibilidades.

Si este razonamiento es correcto, la actual rebelión social es imputable a deficiencias políticas, en la ejecución o en los controles a su cargo. Pero cada sociedad no puede considerarse inocente en tanto cuente con la posibilidad de elegir a sus gobernantes y hacer el seguimiento, en su medida, del ejercicio de las responsabilidades a cargo de las instituciones, como ocurre en los países desarrollados en que están transcurriendo las convulsiones.

Del modo como se ejerza la democracia y el estilo de gobierno en un país dependerà

su salud política. De ésta, se devengarán las consecuencias económicas. Y del resultado económico, sin la posibilidad de recurrir a otras vías, obtendremos las capacidades para administrar los limitados recursos disponibles y asistir a los requerimientos sociales.

En otras palabras, la justicia social depende inexorablemente de la calidad política y del desarrollo económico. La actual mundialización
de la economía torna difícil
que cualquiera de los
países quede ajeno a los
efectos de las crisis y las
consecuencias sociales.

Si esta norma elemental no se respeta, la ecuación carece de sustento y se torna en un germen de una crisis económica, una caida de los repartos asumidos como exigibles (el ajuste), descontento social y consecuente crisis política.

El joven que luego de prepararse sale en busca de su primer empleo, encuentra serias dificultades para lograrlo.

Los ajustes se llevan a cabo en el ámbito fiscal para estar en condiciones de solventar el incremento de la deuda soberana (por el aumento del riesgo país y por el declinante grado de apoyo exterior), se termina la ficción transitoria de un simulado bienestar y se produce el inevitable desempleo, la caída de los ingresos genuinos de los asalariados, la reducción de los beneficios previsionales, entre otros efectos, dando lugar, por ende, a una resistencia explicable en los sectores sociales afectados.

La actual mundialización de la economía torna difícil que cualquiera de los países quede ajeno a los efectos de las crisis y las consecuencias sociales.

La caída de la actividad mundial también incide en el comercio internacional y en el nivel de empleo. Los impactos, no obstante, son diferentes.

Las sociedades o los sectores de una sociedad con mejores conocimientos sufren menos las consecuencias de la crisis, mientras que los más vulnerables (por no poseer todavía un empleo, por perder su empleo con edad avanzada y sin competencias específicas, por ejemplo) encuentran desalentadoras dificultades para su inserción laboral y social.

El joven que luego de prepararse sale en busca de su primer empleo, encuentra serias dificultades para lograrlo, al punto de que se habla de la generación "pre-parada", porque está condenada a una desocupación casi inevitable. Desde este punto de vista, el estudio y la capacitación de los jóvenes sería un estadio previo al desempleo, aunque es fácil suponer cuáles serán las escasas perspectivas de jóvenes no preparados que intenten disputar las disminuidas vacantes.

En la mayoría de los países el porcentaje de desempleo joven es motivo de profunda inquietud.

Las medidas asistenciales que esgrimen algunos gobiernos como cosmética para mantenerse a flote y disimular las deficiencias durante algún tiempo, son simples paliativos que postergan lo inevitable de las consecuencias.

En la generalidad de los casos hasta duplica la tasa de desempleo total. La Organización Internacional del Trabajo tiene este tema entre los de su preferente atención. También lo son el envejecimiento de la población y la situación de otros sectores vulnerables.

El aumento del sector de trabajo informal y el creciente incumplimiento de las obligaciones tributarias en general caracterizan los datos de las sociedades afectadas por las crisis en curso.

Las medidas asistenciales que esgrimen algunos gobiernos como cosmética para mantenerse a flote y disimular las deficiencias durante algún tiempo, son simples paliativos

que postergan lo inevitable de las consecuencias.

Si se asignan subsidios que luego se eternizan, se hace necesaria una presión impositiva que desalienta la inversión genuina y la creación de puestos de trabajo. Cae entonces la actividad y a menor recaudación real se agotan los recursos genuinos, mientras a la par se incrementan las necesidades básicas a cubrir.

Otra variante a la que se recurre consiste en aparentar que las medidas asistenciales que se adoptan son viables para siempre, disimulando ese gasto insostenible con emisión, aliento desmesurado para promover el consumo, crecimiento injustificado del empleo público dependiente del presupuesto fiscal y subsidios a algunos sectores elegidos de la población (empresas o individuos).

Estas medidas ocultan siempre el nivel real de desempleo y la decadencia estructural; pero son penosamente eficaces desde la óptica electoral, por lo que aseguran su permanencia más de lo deseable.

Las políticas basadas en el tipo de cambio solamente postergan el colapso si no es que se llevan a cabo en coherencia con estrategias generales que corrijan las estructuras.

Otra variante a la que se recurre consiste en aparentar que las medidas asistenciales que se adoptan son viables para siempre. Lo mismo puede decirse de las reformas en materia de derechos laborales que únicamente pongan el acento en la precarización. Es preferible, en esos casos, optar por una reducción del impacto tributario sobre los contratos estables. La flexibilidad debe entenderse como la facilidad de adaptación de las normas a las exigencias de los cambiantes escenarios:

Algunas medidas que tienden a evitar un ajuste y un enfriamiento de la economía tienen como consecuencia un proceso inflacionario que poco sirve para ocultar una real caída del poder adquisitivo de los asalariados, con el

consiguiente descontento y reclamo que sobrevienen a renglón seguido.

Y ese proceso es también insostenible en el tiempo. No queda otra salida que adoptar reformas serias, consensuadas con los actores sociales, que permitan reducir las causas de estos derrumbes y afrontar con alguna resignación los dolores de parto.

La paz social, que es la medida del sustento de la política, depende del empleo y de la actividad productiva. Los ajustes que pretendan limitarse a castigar a los individuos cada vez que deba recomponerse una debacle, conducirán inexorablemente a un rechazo generalizado si no son seguidos de crecimiento y desarrollo armónico con inclusión de todos los sectores.

Los actores sociales, cámaras y sindicatos deberán dirigir la defensa de sus representados hacia cuestiones que hasta ahora han sido ajenas al tema laboral: la educación, el endeudamiento público, los mecanismos de control, el gasto fiscal, el financiamiento de la segundad social, entre otros.

Esas materias sustantivas son propias de un organismo de participación preestablecida de distintos actores, muy parecido a un Consejo Económico y Social, debidamente institucionalizado para generar confianza y reconocimiento, en la seguridad de que no habrá una salida factible si además de su aptitud no cuenta con el debido consenso y aceptación.